



1º Ejercicio

SUPUESTO OFIMÁTICO

INSTRUCCIONES GENERALES

Su tarea consiste en reproducir en un documento de WordPerfect 7.0. el contenido de las páginas siguientes.

Deberá ajustarse a todas las características de presentación que aparecen, tales como bordes, rellenos, líneas, formatos de fuente, justificados, encabezados, paginado, objetos, ecuaciones...etc, así como a la página donde aparece cada elemento y su posición dentro de la misma.

Su objetivo es conseguir un documento que sea idéntico al modelo entregado.

Si se encuentra con algún aspecto del documento modelo que no sabe reproducir íntegramente, intente acercarse lo más posible a ese resultado.

Dispone de **30 minutos** para realizar el primer ejercicio. Cuando quede 1 minuto para finalizar, se le avisará para que proceda a archivar el documento en el disquete que se le ha entregado. Deberá guardarlo con el nombre **supuesto.wpd**

A la vuelta de esta página encontrará unas breves instrucciones específicas para este supuesto concreto, referentes al tipo de fuente, tamaño y otros aspectos que deberá respetar en cada página.

**NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE
ESPERE LAS INSTRUCCIONES DEL EXAMINADOR**

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: SUPUESTO C

En todo el documento: Fuente **Arial Narrow**, tamaño **12**.

Texto de la filigrana: Confidencial. Tamaño fuente: 50.

Numeración de páginas

Página ❶

Encabezado para páginas impares

Columnas: periodísticas.

Textart: cuadro de 11cm de ancho X 3 cm. de alto.

Página ❷

Encabezado para páginas pares

Tabla: 5 filas X 5 columnas.

2,2 cm. de ancho de columna y 1cm. de alto de fila.

Ecuación: tamaño de fuente 16.

CONFIDENCIAL

S

Internet supone un cambio que afecta a la estructura básica de la sociedad moderna.

Afecta especialmente a los espacios culturales y de comunicación, se amplían y, de alguna manera, se deslocalizan, se desligan de un territorio¹ y espacio concreto.

El índice de penetración de Internet en sociedades tan desarrolladas tecnológicamente como Japón es semejante al de Europa (6%), experimentándose crecimientos hasta del 80% anuales. En Japón, por ejemplo, se estimaba que el número de usuarios de Internet en 1997 era de unos 4 millones, mientras que ya en 1998 esta cifra había ascendido a los 12 millones de usuarios.

En algunos países, por tanto, aunque no pueda hablarse todavía de "audiencias de masas", en el sentido que nos referimos a la televisión, sí que puede hablarse de "grandes" audiencias.

¡Tenemos web!

P CONFIDENCIAL «

	Madrid	Burgos	Jaén	
Madrid		11,1	11,1	Madrid
Burgos	11,1		22,22	Burgos
Jaén	11,1	22,22		Jaén
	Madrid	Burgos	Jaén	

Tabla 3. Materiales de formación Intercambiados entre regiones durante Enero de 2002

$$\sqrt[4]{2x \% 1} \cdot \frac{\sqrt{2}}{x^{2\%} y}$$

- ! Tipología de mediadores en Internet
 - ! Buscadores universales
 - ! Altavista
 - ! Excite
 - ! Lycos
 - ! Yahoo
 - ! Buscadores locales
 - ! Especializados en distintas lenguas
 - ! Especializados en continentes
 - ! Servicios de información monotemática
 - ! Área de interés
 - ! Profesional
 - ! Afición
 - ! Personas
 - ! Búsqueda de relaciones amistosas
 - ! Relaciones comerciales
 - ! Mass Media tradicionales

1. Sin perjuicio del destino elegido



2º Ejercicio

PRUEBA DE VELOCIDAD

INSTRUCCIONES GENERALES

En las páginas siguientes encontrará el texto que tiene que mecanografiar, para lo cual dispone de **10 minutos**. Transcurrido ese tiempo y una vez que el examinador dé orden de finalizar, Vd. deberá archivar el documento en el disquete que se le ha entregado con el nombre **velocidad.wpd**

**NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE
ESPERE LAS INSTRUCCIONES DEL EXAMINADOR**

En coincidencia con anteriores iniciativas, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil aspira también a ser Ley procesal común, para lo que, a la vez, se pretende que la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, circunscriba su contenido a lo que indica su denominación y se ajuste, por otra parte, a lo que señala el apartado primero del artículo 122 de la Constitución. La referencia en este precepto al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales no puede entenderse, y nunca se ha entendido, ni por el legislador postconstitucional ni por la jurisprudencia y la doctrina, como referencia a las normas procesales, que, en cambio, se mencionan expresamente en otros preceptos constitucionales.

Así, pues, no existe impedimento alguno y abundan las razones para que la Ley Orgánica del Poder Judicial se desprenda de normas procesales, no pocas de ellas atinadas, pero impropiaamente situadas y productoras de numerosas dudas al coexistir con las que contienen las Leyes de Enjuiciamiento. Como es lógico, la presente Ley se beneficia de cuanto de positivo podía hallarse en la regulación procesal de 1985.

Mención especial merece la decisión de que en esta Ley se regule, y no sólo en su vertiente estrictamente procedimental, el instituto de la abstención y de la recusación. Es ésta una materia, con innegables facetas distintas, de la que se ocupaban las leyes procesales, pero que fue regulada, con nueva relación de causas de abstención y recusación, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La presente Ley es ocasión que permite culminar ese perfeccionamiento, afrontando el problema de las recusaciones temerarias o con simple ánimo de dilación o de inmediata sustitución del Juez o Magistrado recusado. En este sentido, la extemporaneidad de la recusación se regula más precisamente, como motivo de inadmisión a trámite. La causa de recusación relativa a ser el recusado objeto de denuncia o de acusación en sentido lato se perfila más correctamente, de suerte que lo que determine la recusación, o la abstención, no sea la denuncia o la querella, sino el que éstas fundamenten y originen una causa criminal en que aparezca implicado el recusado. Finalmente, se prevé multa de importante cuantía para las recusaciones que, al ser resueltas, aparezcan propuestas de mala fe.

No parece convincente el argumento según el cual la abstención y recusación, que no entraña cambio del órgano jurisdiccional ni afecta a su competencia, es materia reservada por la Constitución a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En efecto: aunque la existencia de los institutos jurídicos de la abstención y la recusación constituye, sin duda alguna, un elemento necesario para la Administración de Justicia en su conjunto, es sabido que la abstención y la recusación sólo cobran relevancia en función de elementos de procesos concretos y únicamente respecto de ellos, con la inmediata y directa eficacia de una garantía del enjuiciamiento

objetivo e imparcial en los casos correspondientes y para la tutela de derechos fundamentales de los justiciables. Así lo confirma, no sólo el hecho de que, desde la vigencia de la Constitución hasta 1985, no se cuestionara la ubicación en las leyes procesales de la abstención y recusación, sino la definitiva incardinación de ésta, por el Tribunal Constitucional, en el ámbito del derecho fundamental a un juez imparcial, más que en el de la predeterminación legal del juez ordinario.

Las leyes procesales son, pues, sede legítima de las normas sobre abstención y recusación, en absoluto inequívocamente insertas en la constitución, organización y funcionamiento de los Juzgados y Tribunales ni propiamente relativas al estatuto de los Jueces y Magistrados de Carrera.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspirándose en el principio de justicia rogada o principio dispositivo, del que se extraen todas sus razonables consecuencias, con la vista puesta, no sólo en que, como regla, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos e intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos, a los que corresponde la iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso, sino en que las cargas procesales atribuidas a estos sujetos y su lógica diligencia para obtener la tutela judicial que piden, pueden y deben configurar razonablemente el trabajo del órgano jurisdiccional, en beneficio de todos.

De ordinario, el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial en función de sus derechos e intereses legítimos. Según el principio procesal citado, no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiere una respuesta de tutela conforme a Derecho. Tampoco se grava al tribunal con el deber y la responsabilidad de decidir qué tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponde al caso. Es a quien cree necesitar tutela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisión, alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jurídicos correspondientes a las pretensiones de aquella tutela. Justamente para afrontar esas cargas sin indefensión y con las debidas garantías, se impone a las partes, excepto en casos de singular simplicidad, estar asistidas de Abogado.

Esta inspiración fundamental del proceso, excepto en los casos en que predomina un interés público que exige satisfacción, no constituye, en absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el Derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir. Y menos aún constituye el repetido principio ningún inconveniente para que la Ley refuerce notablemente las facultades coercitivas de los tribunales respecto del cumplimiento de sus resoluciones o para sancionar comportamientos procesales manifiestamente contrarios al logro de una tutela efectiva. Se trata, por el contrario, de disposiciones armónicas con el papel que se confía a las partes, a las que

resulta exigible asumir con seriedad las cargas y responsabilidades inherentes al proceso, sin perjudicar a los demás sujetos de éste y al funcionamiento de la Administración de Justicia.

En el ámbito de las disposiciones generales, la Ley introduce numerosas innovaciones con tres grandes finalidades: regular de modo más completo y racional materias y cuestiones diversas, hasta ahora carentes de regulación legal; procurar un mejor desarrollo de las actuaciones procesales; y reforzar las garantías de acierto en la sentencia.

A todas las disposiciones generales sobre la jurisdicción y la competencia, los sujetos del proceso, sus actos y diligencias, las resoluciones judiciales, los recursos, etc., concede la Ley la importancia que merecen, a fin de que constituyan pautas realmente aplicables en las distintas fases del proceso, sin necesidad de reiterar normas y regulaciones enteras.